



Martes 10 de octubre de 1950,
a las 15 horas

QUINTO PERIODO DE SESIONES

Documentos oficiales

Lake Success, Nueva York

INDICE

Página

Reservas a las convenciones multilaterales (A/1372) (continuación)..... 41

Presidente: Sr. V. OUTRATA (Checoslovaquia).

**Reservas a las convenciones multilaterales
(A/1372) (continuación)
(Tema 56 del programa)***

1. El Sr. TATE (Estados Unidos) hace notar que ya ha explicado la actitud de su delegación en la sesión precedente (A/C.6/SR.217). Desea, sin embargo, dar a la Sexta Comisión algunas explicaciones suplementarias acerca del proyecto revisado de resolución (A/C.6/L.114/Rev.1) que presentó su delegación.

2. El Sr. Tate estima que no incumbe a la Comisión formular reglas de fondo sobre una cuestión tan compleja como la de las reservas, siendo su función únicamente indicar al Secretario General la práctica que debe seguir, en sus funciones de depositario de convenciones multilaterales.

3. El Sr. Tate explica las tres proposiciones contenidas en el proyecto de resolución revisado de su delegación. La primera consiste en proporcionar al Secretario General una norma que establezca en qué condiciones puede recibir una ratificación acompañada de reservas, mientras la Comisión de Derecho Internacional no haya dado a conocer su solución. La segunda propone dejar a cada uno de los Estados, en esta etapa intermedia, el derecho de determinar los efectos jurídicos de las reservas formuladas. Por la tercera se confía a la Comisión de Derecho Internacional el estudio de los efectos jurídicos de las reservas.

4. Para poner de relieve la necesidad de una decisión rápida de la Sexta Comisión en lo que respecta a las funciones de depositario del Secretario General, el Sr. Tate cita como ejemplo la Convención sobre el genocidio. Esta convención debe entrar en vigor el nonagésimo día después del depósito del vigésimo instrumento de ratificación. Ciertos instrumentos de ratificación llevan consigo reservas y el Secretario General debe saber cuáles son los Estados cuyo consentimiento respecto a estas reservas es necesario para determinar si tales ratificaciones pueden o no producir sus efectos.

5. El proyecto de resolución de los Estados Unidos se ciñe a la cuestión, muy limitada, del procedimiento que ha de adoptar el Secretario General en sus funciones

de depositario. El Sr. Tate hace resaltar este punto citando nuevamente el ejemplo de la Convención sobre el genocidio. Supone que diecinueve Estados la han ratificado sin reservas y que el vigésimo Estado ha formulado una reserva en el momento de la ratificación. Dieciocho Estados aceptan esta reserva, el decimonoveno la rechaza. Luego el vigésimoprimer Estado ratifica la Convención sin formular reservas. La Convención entra en vigor 90 días después del depósito del instrumento de ratificación del vigésimoprimer Estado. Pero en su informe, el Secretario General declara que el vigésimo Estado no entra a ser parte en la Convención. He aquí una cuestión de fondo. Por el contrario, según la proposición de los Estados Unidos, el vigésimo Estado entra a ser parte en la Convención con respecto a los Estados que aceptan su reserva. El proyecto de resolución de los Estados Unidos presenta especialmente la ventaja de permitir a los miembros de la Organización de los Estados Americanos seguir la norma adoptada por la Unión Panamericana.

6. El Sr. Tate insiste especialmente en las diferencias entre la tesis del Secretario General y la de su delegación diferencias que hacen evidentes el proyecto revisado de resolución sometido a la Sexta Comisión.

7. El Sr. Tate estima, por otra parte, que, en cuanto al fondo del problema, es preferible remitir la cuestión a la Comisión de Derecho Internacional, y no a la Corte Internacional de Justicia. En efecto, subraya el Sr. Tate, la Corte Internacional de Justicia se pronuncia sobre una cuestión tomando únicamente en consideración el derecho existente, mientras que la Comisión de Derecho Internacional, aunque contempla el derecho existente, puede, además, influir en la evolución del derecho y llenar las lagunas existentes entre los diversos principios jurídicos.

8. La actitud del Sr. Tate difiere a este respecto de la adoptada por el representante del Reino Unido, quien recomienda la remisión del asunto a la Corte Internacional de Justicia y declara que la función de la Comisión de Derecho Internacional es la de codificar, y no la de resolver cuestiones dudosas. El Sr. Tate es de parecer que se trata de una cuestión compleja que requiere un estudio completo, no parcial, y que es, por consiguiente, de la competencia de la Comisión de Derecho Internacional. El representante del Reino Unido ha

* Indica el número del tema en el programa de la Asamblea General.

declarado que los diversos países pueden presentar más fácilmente sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia. El Sr. Tate señala que, según el Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional, los diversos gobiernos pueden hacer valer sus opiniones ante esta Comisión como ya ha acontecido en el pasado.

9. Las delegaciones de Francia y del Reino Unido han observado que la Corte Internacional de Justicia daría a conocer su decisión con mayor celeridad que la Comisión de Derecho Internacional. El Sr. Tate declara que este argumento no es concluyente, pues lo que presenta un carácter de urgencia no es el fondo del problema, sino únicamente la cuestión precisa de las funciones del Secretario General como depositario de convenciones multilaterales. Ahora bien, esta cuestión concreta queda resuelta en el proyecto de resolución de los Estados Unidos.

10. Finalmente, el Sr. Tate señala que el proyecto de resolución del Uruguay (A/C.6/L.116), así como la enmienda propuesta por el Irán (A/C.6/L.119) al proyecto de resolución de los Estados Unidos, atañen igualmente al fondo del problema. Por ello el Sr. Tate pide a la Sexta Comisión que se atenga al proyecto revisado de resolución que ha presentado su delegación.

11. El Sr. LESAGE (Canadá) hace hincapié en que la mayor parte de los tratados concertados bajo los auspicios de las Naciones Unidas tienen carácter legislativo. Su alcance es general y sus efectos, hasta cierto punto, son permanentes. Su elaboración es el resultado de la colaboración de la gran mayoría de los Estados del mundo. Son una fuente importante del derecho internacional. Difieren en ello, y de manera esencial, de los acuerdos contractuales. La cuestión de las reservas a esos tratados debe, por consiguiente, considerarse atendiendo a ese carácter legislativo; y es esta una cuestión que atañe al fondo del problema.

12. El Sr. Lesage hace recordar la tendencia de la Sociedad de las Naciones, consistente en definir, en el tratado mismo, las reservas que las partes estaban dispuestas a aceptar, o bien en proscribir expresamente el derecho a formular reservas. El Sr. Lesage cita algunos ejemplos.

13. En la actualidad, con respecto a los tratados celebrados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, todos los Miembros de éstas, y aun algunas veces Estados que no pertenecen a ellas, en el caso de ciertas conferencias auspiciadas por los organismos especializados, tienen la posibilidad de hacer valer sus opiniones en el curso de las discusiones que preceden a la firma, y de obtener algunas veces la modificación de ciertas disposiciones. Si no la obtienen, pueden pedir la inclusión de una cláusula que permita a un Estado formular reservas en el momento de la ratificación. Esa cláusula será aceptada por lo general, salvo el caso en que los demás Estados juzguen que se opone radicalmente a la finalidad misma del tratado.

14. El Sr. Lesage estima que este procedimiento, basado en que los Estados precisen su actitud al tiempo de la elaboración del Tratado, es el único conveniente. Está enteramente conforme en este respecto con la declaración hecha anteriormente por el representante del Brasil.

15. Por estas razones, la delegación del Canadá apoya la enmienda propuesta por el Irán, sugiriendo, no

obstante, que la redacción de esta enmienda sea ligeramente modificada. Sin embargo, el Sr. Lesage no presenta una enmienda formal a la enmienda del Irán, pues estima que indudablemente será necesario designar un comité de redacción que tenga por misión coordinar las diversas proposiciones cuando la Comisión haya definido su actitud.

16. El Sr. Lesage estima que la Sexta Comisión debería recomendar al Secretario General que se atuviera a la práctica que hasta ahora ha seguido. Se adhiere, sobre este punto, al primer proyecto de resolución de los Estados Unidos (A/C.6/L.114), así como a la enmienda propuesta por el Reino Unido (A/C.6/L.115), que está dispuesto a apoyar.

17. De una manera general, está de acuerdo con el representante de Francia, salvo en cuanto éste propone que el Secretario General suspenda toda acción en espera de la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Ello equivaldría, en efecto, a apartarse de la práctica seguida hasta ahora, lo cual presentaría especialmente el inconveniente de impedir que entre en vigor la Convención sobre el genocidio. En cambio, de atenerse a la práctica actual, esta Convención podrá entrar en vigor después del depósito de nuevos instrumentos de ratificación que no contengan reserva alguna.

18. El Sr. Lesage manifiesta que su delegación no puede aceptar la enmienda del Uruguay, que en la práctica daría por resultado un fraccionamiento de las convenciones, lo que no es admisible en el caso de convenciones de carácter legislativo.

19. El Sr. Lesage apoya firmemente a los representantes del Reino Unido y de Francia, cuando proponen que se remita el estudio de la cuestión a la Corte Internacional de Justicia. Este es, en efecto, el procedimiento normal recomendado por la Carta en su Artículo 96. Por otra parte, esta solución presenta la ventaja de permitir a todos los miembros de las Naciones Unidas exponer públicamente sus argumentos ante la Corte. Por último, es tanto más conveniente por cuanto el factor tiempo es asimismo importante.

20. El Sr. Lesage estima que hay dos maneras de plantear la cuestión ante la Corte; consiste la primera en formular esta cuestión en términos muy generales, como ha sugerido el representante de Francia; la segunda consiste en plantear una cuestión concreta sobre la validez de la práctica seguida actualmente por el Secretario General.

21. El Sr. Lesage se pronuncia en favor de la segunda solución y apoya el proyecto de enmienda presentado por el Reino Unido, en el que se formula de manera satisfactoria la cuestión que ha de plantearse ante la Corte. Sin embargo, hace reserva de la actitud de su delegación en cuanto al párrafo 4 de este proyecto de enmienda, en el cual el Reino Unido expone la actitud que adoptaría en el caso de que no se aceptara la remisión del asunto a la Corte Internacional de Justicia.

22. El Sr. ROLING (Países Bajos) dice que es preciso resolver inmediatamente el problema de las instrucciones que se han de dar al Secretario General como depositario de los acuerdos multilaterales. La Comisión de Derecho Internacional se encargará en general de los problemas en lo porvenir y podrá preparar tipos uniformes de soluciones que respondan a cualesquiera necesidades, de modo que en lo sucesivo los redactores de convenciones multilaterales cuenten con disposicio-

nes uniformes formuladas con precisión, de entre las cuales sea posible escoger según las necesidades del momento.

23. La discrepancia más saliente que ha surgido hasta ahora es la existente entre la solución por el sistema de la Unión Panamericana y la tesis de que la objeción de una de las partes excluya del tratado a la parte que formule reservas.

24. El sistema panamericano se estima conveniente para los acuerdos regionales entre Estados ligados por relaciones estrechas de vecindad, tradición y cultura, pero no se adapta a las necesidades de una organización mundial como las Naciones Unidas. Sin embargo, se puede fácilmente sostener el criterio opuesto, o sea, que en el caso de pequeños grupos estrechamente unidos hay mayor razón para seguir un sistema que una a todas las partes en un lazo común, que para seguir un sistema en el que se prevean excepciones determinadas. Por otra parte, se puede argumentar que los lazos relativamente holgados que existen en una organización universal requieren posibilidades de excepciones conforme a la actitud particular de determinados Estados. En primer lugar, no es el alcance de la convención sino su índole, lo que determina el sistema adecuado. El sistema de la Unión Panamericana corresponde a acuerdos multilaterales que constituyen primeramente el punto de coincidencia de relaciones bilaterales.

25. Existen, empero, los tratados legislativos encaminados al establecimiento de relaciones entre un grupo de Estados por una parte y por otra un conjunto de normas. De la índole de éstas se deduce con facilidad que cada parte se halla dispuesta a obligarse únicamente a condición de que las demás partes queden análogamente obligadas. He aquí el punto crucial: para algunos tratados multilaterales sería preciso el sistema de la Unión Panamericana, en tanto que para otros haría falta un sistema diferente. El hecho de ser concertado un tratado multilateral bajo los auspicios de las Naciones Unidas no basta para deducir que pertenece a una categoría especial, a saber, la de los tratados legislativos.

26. En consecuencia, el proyecto de resolución presentado por el Reino Unido y Francia no tiene toda la precisión necesaria. En caso de solicitar de la Corte su opinión consultiva, habría que señalar los tratados comprendidos, de modo que la Corte pueda emitir su opinión conforme al carácter de cada tratado en particular. Aun en este caso, no hay seguridad de que la opinión no adolezca de ambigüedades. Existe la posibilidad de que la decisión de la Corte ocasione dudas en cuanto a su cumplimiento, y el Secretario General se encontraría nuevamente ante un problema concerniente a su deber como depositario.

27. A juicio del orador, únicamente en relación con la Convención sobre el genocidio resultan de urgente necesidad las instrucciones. No hace falta pedir a la Corte su opinión acerca de este tratado legislativo. La Asamblea General puede dar al Secretario General las instrucciones necesarias, sin dificultad alguna. La Convención sobre el genocidio es una convención multilateral por la cual las partes quisieron establecer normas jurídicas precisas. Por consiguiente, es de temer que todas las partes pierdan interés en el conjunto de la Convención si otros Estados pueden fijar, entre sí, normas distintas mediante reservas. De pedirse instrucciones en cuanto a la Convención sobre el Genocidio, no

es el sistema de la Unión Panamericana la solución adecuada. Las reservas concernientes a esta Convención deberían ser apoyadas por todas las partes.

28. ¿Quiénes son estas partes? ¿Únicamente las que han ratificado la Convención, o todas las signatarias? Al observar el gran número de convenciones multilaterales concluidas en el pasado bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones y de las Naciones Unidas, es innegable que existe la práctica, casi equivalente a ligereza, de firmar textos de convenciones y no ratificarlas después. Puesto que no es la firma sino la esperada ratificación lo que da base jurídica al derecho de aceptar o rechazar las reservas propuestas por los demás, es lógico llegar a la conclusión de que el Estado que no se propone proceder a la ratificación, invalida su derecho de oponerse a las reservas, y por tanto de excluir la ratificación de otro Estado. En consecuencia, una solución razonable sería la de que, en caso de ofrecerse una ratificación con reservas, sólo pudiesen objetar efectivamente quienes hubieren ratificado o declarado a su debido tiempo su propósito de hacerlo.

29. La norma que debe aplicar el Secretario General debe ser la que se derive lógicamente de la naturaleza del tratado multilateral correspondiente. En cuanto a los tratados existentes, como la Convención sobre el genocidio, deben tener derecho a oponer sus reservas, únicamente los signatarios que: a) hayan otorgado su ratificación; b) hayan manifestado su propósito de otorgar su ratificación dentro de un plazo razonable.

30. El Sr. HSU (China) advierte que la mayoría de los miembros de la Comisión parece desear que la cuestión sea: remitida a un órgano competente, para que dé su dictamen. Sólo falta seleccionar tal órgano y llegar a un acuerdo en cuanto al procedimiento que ha de seguirse entre tanto. Por lo que respecta a este último punto, es posible continuar la práctica seguida por el Secretario General, o bien adoptar el sistema panamericano. El Sr. Hsu se pronuncia en favor de la primera solución, puesto que la mayor parte de los tratados respecto a los cuales el Secretario General actúa como depositario son tratados-leyes, para los cuales conviene adoptar una solución única. Era ese el sistema practicado por la Sociedad de las Naciones y su antigüedad debe asegurar su respeto. Si el sistema que se adoptara no fuera mejor que el antiguo, se correría el riesgo de provocar confusión.

31. En cuanto a la cuestión de la selección del órgano al cual se ha de pedir que emita dictamen, el representante de la China prefiere que sea la Comisión de Derecho Internacional, y no la Corte Internacional de Justicia. No se trata de determinar si la práctica seguida por el Secretario General es conforme al derecho internacional, sino si es preferible al sistema panamericano. Las divergencias que se manifiestan se refieren a determinar cuáles son las partes interesadas en las reservas; en qué momento es posible hacer una excepción al principio de que las reservas han de ser aprobadas por todas las partes interesadas; y cuál debe ser la extensión de esta excepción.

32. El Sr. Hsu estima que, para resolver estas cuestiones, conviene estudiar los diferentes tipos de convenciones multilaterales y el núcleo internacional que las ha concertado. La Comisión de Derecho Internacional es más competente que la Corte para proceder a tal estudio. La Comisión está ya encargada de la codifi-

cación del derecho relativo a los tratados, y la cuestión de las reservas a las convenciones multilaterales es sólo una parte de esa labor. La Asamblea podría pedir a la Comisión que diera precedencia al examen de la cuestión. No es bien fundado el temor de que en tal forma se recargue excesivamente la labor de la Comisión. El Sr. Hsu estima que debe mantenerse la composición actual de la Comisión, a fin de permitirle terminar los trabajos comenzados hace dos años.

33. Según el representante de la China, la Asamblea debería, por consiguiente, remitir la cuestión a la Comisión de Derecho Internacional.

34. El Sr. BALLARD (Australia) felicita a la Secretaría por su informe que, así como las intervenciones ya oídas en el curso del debate, revela todo el alcance de la cuestión.

35. La petición presentada por el Secretario General es, por su carácter, de procedimiento y no se trata en ella de determinar una cuestión de derecho. Pero, aunque en principio se trata de un acto administrativo, entraña cuestiones jurídicas. En efecto, la parte que desee adherirse a una convención puede ser excluida en caso de no ser aceptado el depósito de un instrumento de ratificación que contenga la reserva formulada por esa parte. En la suposición de que todas las partes interesadas (con inclusión de las partes potenciales) tengan que aceptar las reservas, hay divergencias de opinión respecto de las partes a que se refiere. El término "partes" se refiere a los Estados que podrían llegar a ser partes en la convención, y existen divergencias sobre la cuestión de determinar cuáles son las partes a las que atañe una reserva. La delegación de Australia considera conveniente obtener un dictamen de reconocida autoridad en la materia. Juzga que no incumbe a la Asamblea General resolver una cuestión de derecho sobre la cual el Secretario General haya de ser invitado a basar su procedimiento.

36. Prefiere la delegación de Australia que se consulte a la Corte Internacional de Justicia y no a la Comisión de Derecho Internacional, por las razones que ha indicado el representante del Reino Unido. Las convenciones multilaterales respecto a las cuales el Secretario General actuará de depositario serán siempre de carácter legislativo y parece preferible pedir la opinión de la Corte solamente sobre esta categoría de convenciones.

37. En las convenciones que establecen normas de conducta internacional, como la Convención sobre el genocidio, las partes examinan las reservas de una manera más cuidadosa que cuando se trata de la codificación de disposiciones de carácter técnico. Si se formulan reservas que están en contradicción con la finalidad de las convenciones legislativas, los que tienen derecho a oponerse a ellas lo harán con más vigor si se trata, por ejemplo, de un acuerdo sobre intercambio comercial. Lo mismo puede decirse en cuanto a la cuestión de determinar si las partes que formulan reservas que no son aceptadas, pueden únicamente optar entre retirar su reserva o no adherirse a la convención.

38. El informe del Secretario General indica que existen varios sistemas relativos al procedimiento que puede seguir un depositario para conseguir que una reserva sea aceptada y con respecto al efecto jurídico de las objeciones hechas a una reserva. Según el Sr. Ballard, el segundo problema es de carácter jurídico cuya decisión no compete a la Asamblea, pero el

primero sí es problema de procedimiento que puede ser solucionado. Sin embargo, al decidirlo, la Asamblea debe hacerlo basándose en lo que cree ser derecho. Requiere por lo menos el consentimiento de los signatarios. Tal era la práctica de la Sociedad de las Naciones, y tal es la práctica seguida por un impresionante número de Estados. Se ha sugerido que, por motivos de conveniencia, se limite, pero los motivos de conveniencia no son suficiente razón para privar a los signatarios del derecho a ratificar una convención en la misma forma que tenía al finalizar las negociaciones. Como en el caso de la Convención sobre el genocidio se produjo precisamente eso, es de temer que se formulen reservas que traten de volver sobre puntos ya decididos. Asimismo, en el caso en que la opinión de la Corte no fuese solicitada, la delegación de Australia apoyaría la enmienda del Reino Unido que propone la adopción de una norma tendiente a proteger el derecho de los signatarios. La impresión que se saca de un primer examen de la solución preconizada por el representante de los Estados Unidos de América (A/C.6/L.114/Rev.1) es la de que no podría ser adoptada de modo permanente, puesto que oscurecería el problema de las ratificaciones con reservas. La misma ratificación no podría ser válida para un propósito (poner en vigor la convención) y de validez ambigua para otros (admitir partes en la convención y definir sus obligaciones).

39. Si una de las partes que ya hubiesen ratificado el tratado, se opusiera a una ratificación con reserva, esta última ratificación no podría ser contada para hacer entrar en vigor la convención; pero el representante de Australia se pregunta si, aun en el caso de que esa reserva no suscitase objeciones, la ratificación del Estado que la ha formulado debería entrar en el cómputo de las ratificaciones necesarias para la entrada en vigor de la Convención. En efecto, es posible que eso suscitar una objeción de la parte que fuera más tarde a ratificarla sin reservas, y cuya ratificación haría entrar en vigor esa Convención. Según el párrafo 22 del informe del Secretario General, el Gobierno francés, que actuaba como depositario, adoptó una actitud de singular prudencia a este respecto. Con la aprobación del proyecto de resolución enmendado propuesto por los Estados Unidos de América (A/C.6/L.114/Rev.1) se arriesgaría el permitir que un número limitado de ratificaciones con reserva hiciese entrar en vigor una convención en forma truncada.

40. Refiriéndose a la enmienda del Uruguay (A/C.6/L.116), relativa al problema de los efectos jurídicos de la objeción presentada por un Estado a una reserva (A/1372, segundo párrafo), el Sr. Ballard estima que esta enmienda no es de procedimiento y que, por tanto, no la apoyará. El orador declara que se abstiene también de discutir las posibilidades de su aplicación a las convenciones de las que el Secretario General es depositario, así como la utilidad de generalizar el sistema panamericano.

41. Al concluir, el representante de Australia indica que él es partidario de la proposición tendiente a que las convenciones concluidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas contengan una cláusula relativa a las reservas.

42. El Sr. ABDOH (Irán) se asocia a las felicitaciones de que se ha hecho objeto al Secretario General por su informe, el cual ofrece un cuadro completo de

las diversas prácticas y tendencias en materia de reservas. Esta cuestión es muy compleja y presenta enorme dificultad. Para que una reserva sea válida, la opinión tradicional exige el consentimiento de todos los interesados. Mas, existen divergencias en cuanto al contenido de la expresión "Estados interesados". Dicen algunos que no se trata más que de los que ya hubiesen efectuado la ratificación, mientras que otros dan una interpretación más amplia a esa noción y abarcan a todos los Estados signatarios.

43. La Sexta Comisión ha de pronunciarse sobre una cuestión de procedimiento que consiste en buscar el método que más convenga para responder a la pregunta planteada por el Secretario General, y no en pronunciarse sobre una cuestión de fondo. Es pues deseable, como ha enseñado la experiencia, remitir la cuestión a un órgano competente. Sería idóneo elegir para ello a la Corte Internacional de Justicia puesto que, como ya ha señalado el representante del Reino Unido, se trata de un pronunciamiento de derecho. El representante del Irán agrega que, habiéndose planteado el problema con ocasión de la Convención sobre el genocidio, convendría tratar de conformarse al espíritu de esta Convención. A falta de un texto explicativo que pudiera dar una solución, se podría tener en cuenta el artículo IX de la Convención citada, que prevé que las dificultades relativas a su aplicación y a su ejecución pueden ser referidas a la Corte Internacional de Justicia.

44. El Sr. Abdoh plantea la cuestión de saber si la disconformidad con una reserva la deja sin valor y excluye a la parte que la ha formulado, y termina pidiendo que antes de pronunciarse, la Sexta Comisión refiera la cuestión a la Corte Internacional de Justicia.

45. El Sr. Abdoh cree que la cuestión, tal y como la ha planteado el representante del Reino Unido, está lo suficientemente clara para que la Corte Internacional de Justicia pueda dictaminar sobre ella. En efecto, el segundo párrafo de la enmienda propuesta por el representante del Reino Unido (A/C.6/L.115) precisa el tipo de convenciones de que se trata, a saber, las convenciones multilaterales; por lo demás, será siempre posible, para dar satisfacción al representante de los Países Bajos, incorporar al final del segundo párrafo una cláusula que dijera: "... y más especialmente a la Convención sobre el genocidio". Así, en el caso de que la Corte no pudiera pronunciarse en lo que concierne a las convenciones multilaterales en general, podría dar una opinión relativa tan sólo a la Convención sobre el genocidio.

46. Es por tanto la Corte Internacional de Justicia, y no la Comisión de Derecho Internacional, la que debe ser consultada. Como ha hecho observar el representante del Reino Unido, la Comisión de Derecho Internacional tiene ya un vastísimo programa de trabajo y la solución de la cuestión que ahora se debate no debiera sufrir retraso alguno. Además, la Comisión de Derecho Internacional, cuya tarea es la de codificar el derecho vigente, no puede examinar desde ahora una cuestión que todavía está siendo muy discutida. La Corte Internacional de Justicia es la única que puede zanjar esta cuestión.

47. El Sr. Abdoh cree, y esto es lo que motiva la enmienda (A/C.6/L.119) propuesta por su delegación al proyecto de resolución de los Estados Unidos de

América, que para dar instrucciones al Secretario General convendría encontrar una fórmula que permitiese, en lo futuro, evitar la repetición de dificultades análogas. El Sr. Abdoh subraya que su fórmula es susceptible de adaptación a todos los proyectos de resolución ya presentados. Convendría recomendar a los Estados Miembros que, al elaborar convenciones, provean disposiciones expresas relativas al procedimiento aplicable por el Secretario General en lo que concierne a las reservas y al efecto jurídico de las mismas. Huelga decir que, en toda la medida de lo posible y sin perjuicio de la autonomía de los Estados, sería preciso abstenerse de formular reservas que debilitasen el alcance de una convención e impidiesen hacer de ésta uno de los elementos incipientes del derecho internacional del porvenir. Por otra parte, para cualquier Estado, la mejor manera de mostrar que desea la validación de una convención consiste no sólo en ratificar esa convención, sino incluso, en ratificarla sin reservas.

48. A este respecto, convendría definir claramente lo que se entiende por "reserva". Parece que, por lo general, una reserva tiende a restringir la aplicación de una convención respecto al Estado que formula esa reserva. Apenas cabe concebir una reserva que tendiera a ampliar el alcance de una convención; de todos modos, conviene precisar bien el sentido de la palabra "reserva", dado que, en el caso de la Convención sobre el genocidio, una de las reservas formuladas no parecía responder a la definición generalmente admitida.

49. Al concluir, el Sr. Abdoh reitera que la Sexta Comisión debe pedir la opinión de la Corte Internacional de Justicia. Ciertamente, se podría aceptar a título provisional, las conclusiones del Secretario General, pero entonces convendría poner bien en claro que tal recomendación no prejuzgaría en nada la decisión que pudiera tomar la Corte Internacional de Justicia.

50. El Sr. SPIROPOULOS (Grecia) rinde tributo al Secretario General por el excelente documento que constituye su informe (A/1372).

51. La cuestión que se halla en estudio ahora reviste gran importancia: no desde el punto de vista político, sino desde los puntos de vista técnico y jurídico. Además, la Sexta Comisión no tiene que examinar esta cuestión en cuanto al fondo, sino simplemente como cuestión de procedimiento: ella debe decidir en qué forma ha de examinarla.

52. Al parecer, hay que destacar un solo punto, a saber: cuál ha de ser la actitud del Secretario General cuando haya recibido un cierto número de ratificaciones que le parezca suficiente para declarar que el instrumento internacional en cuestión entra en vigor a partir de ese momento.

53. El Sr. Spiropoulos no cree que la Comisión de Derecho Internacional deba ser consultada en este asunto. Efectivamente, esta Comisión ha estado estudiando el problema de las reservas desde hace ya un año y, si la Sexta Comisión se lo pidiese, se encontraría sin duda en condiciones de facilitar un texto el próximo año. De todos modos, la Asamblea General tendría entonces que decidir si considera ese texto como una respuesta definitiva o como simple proposición conforme al derecho vigente. La cuestión volvería, sin duda, a la Sexta Comisión y ésta, a su vez, no estaría obligada a aceptar el texto presentado por la Comisión de Derecho Internacional. Además, incluso si lo acep-

tase, dicho texto no vendría a ser por ese hecho un texto de derecho internacional y no crearía obligación para nadie y, en particular, no sería de aplicación obligatoria para la Corte Internacional de Justicia.

54. Está, pues, completamente claro que la Comisión de Derecho Internacional no se halla en condiciones de dar una respuesta definitiva. La cuestión actualmente en estudio no constituye un problema jurídico de orden general, sino que es el resultado del conflicto motivado por las diversas reservas formuladas por varios Estados a la Convención sobre el genocidio. En última instancia, convendría siempre referirla a la Corte Internacional de Justicia y el Sr. Spiropoulos cree, al igual que el representante del Reino Unido, que sería mejor referirla inmediatamente a la Corte.

55. Algunas delegaciones han sugerido que en espera de la opinión de la Corte, el Secretario General sea invitado a seguir ciertas normas concretas. El representante de Grecia no comparte este punto de vista. Estima que la Sexta Comisión no debe dar ninguna instrucción al Secretario General en esta materia. Puesto que corresponde al Secretario General velar por la aplicación de la Convención, le corresponde igualmente interpretar esta Convención y aplicar las normas que juzgue apropiadas respecto a la cuestión de las reservas. Por lo demás, el Sr. Spiropoulos no ve razón alguna para que la Sexta Comisión decida adoptar el sistema propuesto a este respecto por una delegación con preferencia al que proponga cualquier otra delegación. No es cierto, por ejemplo, que la solución propuesta por el representante de los Estados Unidos de América sea mejor que la propuesta por el representante del Reino Unido, o que el procedimiento panamericano. Además, si la Comisión diese preferencia a cualesquiera de estos métodos y si la Corte adoptase, ulteriormente otra decisión, se correría el riesgo de que la Asamblea General llegase a la conclusión de que la Comisión ha interpretado erróneamente el derecho. Este es un peligro que conviene evitar.

56. En lo que atañe a la forma en que la cuestión debe ser planteada ante la Corte Internacional de Justicia, el Sr. Spiropoulos cree que la propuesta sometida por Francia no es satisfactoria, puesto que presenta la cuestión en términos demasiado generales. El representante de Grecia sugiere que la cuestión sea planteada de un modo preciso y que se vuelvan a utilizar los términos empleados por el propio Secretario General en el párrafo 46 de su informe.

57. El Sr. ROBINSON (Israel) se asocia a las felicitaciones dirigidas por los oradores precedentes al Secretario General.

58. Al parecer los miembros de la Comisión están de acuerdo respecto de cinco puntos precisos: *a*) el Secretario General no ha pedido instrucciones relativas a las convenciones multilaterales en general, sino únicamente respecto a las convenciones firmadas bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas y de las cuales es depositario; *b*) las normas convencionales relativas a las reservas deben prevalecer sobre las normas dictadas por la Asamblea General; *c*) el Secretario General no tiene instrucciones precisas en cuanto a la actitud que deba adoptar con respecto a las reservas formuladas a las convenciones multilaterales; *d*) la Asamblea General debe, pues, dar tales instrucciones al Secretario General; *e*) la forma definitiva de

estas instrucciones será determinada por la opinión dada por un órgano legal competente en esta materia.

59. Los miembros de la Comisión han expresado, sin embargo, opiniones diferentes sobre otros aspectos del problema. Las opiniones son asimismo divergentes en lo relativo a saber si el Secretario General tiene derecho a adoptar una actitud respecto de la aceptación o denegación de una reserva, antes o después de la entrada en vigor de una convención. El proyecto de resolución de los Estados Unidos de América (A/C.6/L.114/Rev. 1) privaría al Secretario General, no solamente del derecho a determinar el efecto de la aceptación o el rechazo jurídico de una reserva con respecto a las partes, sino además el de definir si una comunicación de un Estado constituye una reserva o una mera "interpretación", o "declaración aclaratoria".

60. Los miembros de la Comisión se encuentran en presencia de dos conceptos de las funciones de depositario: uno, más amplio, que se funde en la tradición y en el sistema seguido por la Sociedad de las Naciones, y el otro, más estricto, que ha sido expuesto por el representante de los Estados Unidos. A este respecto, sería interesante saber cuál fué la actitud de los países de la América Latina en la época de la Sociedad de las Naciones. El proyecto de resolución de los Estados Unidos, si bien trata de eliminar la incertidumbre en que se encuentra el Secretario General, deja subsistir un peligro porque, al establecer una separación demasiado precisa entre las funciones puramente técnicas del Secretario General y las funciones que consisten en determinar los efectos de una reserva y en tomar una decisión en materia de aceptación o repudio de esta reserva, esto atañe al futuro mismo del tratado multilateral. Por otra parte, desde un punto de vista práctico, tales funciones no pueden ser confiadas a los Estados que son parte en la convención, porque esto se traduciría en la fragmentación de un tratado multilateral y su conversión en un gran número de acuerdos bilaterales.

61. En la hora presente, el problema de las reservas puede dividirse en siete cuestiones: *a*) la admisibilidad de las reservas; *b*) el tiempo durante el cual deben ser formuladas; *c*) los Estados que pueden oponerse a una reserva; *d*) los métodos de aceptación o de repudio; *e*) el efecto jurídico de las reservas; *f*) el órgano que debe dirigir el procedimiento; *g*) la cuestión de saber si se deben establecer reglas generales o si hará falta estudiar normas especiales que se ajusten a ciertos tipos de convención.

62. Es probable que la Corte Internacional de Justicia no pueda dar una opinión sobre el asunto. Ante todo porque el párrafo 1) del Artículo 96 de la Carta no le obliga a hacerlo de ninguna manera; además, porque la Corte Internacional de Justicia aplica los principios generales de derecho universalmente reconocidos. Pero, en lo que se refiere a la cuestión de las reservas, no existen principios generales universalmente reconocidos y la mejor prueba de ello es que los Estados del Sistema Panamericano han aplicado a este respecto, desde hace mucho tiempo, sus propias normas. Tampoco podría la Corte aplicar "convenciones internacionales que establecen normas expresamente reconocidas por los Estados litigantes", desde que tales convenciones no existen. Por otra parte, las decisiones judiciales de otra fuente de derecho internacional no aportan ayuda alguna, dado

que la Corte sólo considera como precedentes a sus propias decisiones. Por último, los estudios publicados sobre la cuestión de las reservas aun cuando son, en derecho, una fuente secundaria, son de escaso valor, pues tratan la cuestión *de lege ferenda* y no la *de lege lata*; por lo demás, la Corte nunca consulta las "enseñanzas de los publicistas más calificados".

63. Aun admitiendo que, a pesar de todas esas consideraciones, la Corte estuviese dispuesta a emitir una opinión, no cabe duda de que no dejarían de manifestarse divergencias de criterios en la misma Corte, puesto que en ella están representados los principales sistemas jurídicos del mundo. Estas dificultades hallarán eco más tarde en la Asamblea General. En estas condiciones, es probable que muchas delegaciones no aprueben la proposición de Francia, encaminada a que el Secretario General aplique inmediatamente las normas adoptadas por la mayoría de la Corte. En ese caso, haría falta considerar la posibilidad de aplazar la cuestión hasta el sexto período de sesiones de la Asamblea General. Sin embargo, eso no resolvería la necesidad de dar al Secretario General instrucciones provisionales. Falta saber si estas instrucciones han de tener un carácter general o si deben referirse a convenciones particulares,

y el Secretario General Adjunto podría quizás proporcionar algunas aclaraciones respecto al número y al carácter de las convenciones cuya entrada en vigor prevé el Secretario General para el año próximo.

64. El problema es mucho más sencillo en el caso de la Comisión de Derecho Internacional, la cual no tiene la obligación de atenerse a los principios existentes y generalmente aceptados. La opinión de la Comisión de Derecho Internacional es indispensable, de todos modos, consúltese o no a la Corte Internacional de Justicia. En caso de que se la consultara, la Comisión de Derecho Internacional podría estudiar el dictamen de la Corte y aplicarlo para la determinación de los preceptos relativos a las reservas. El Sr. Robinson insiste en subrayar que si la Sexta Comisión decidiese pedir una opinión consultiva, él se reservaría el derecho de la delegación de su país en lo que concierne a la formulación de las cuestiones que su delegación juzga particularmente importantes. Quizá sería necesario urgir a la Comisión de Derecho Internacional que acelere su trabajo sobre el derecho relativo a los tratados, inclusive la sección que trata de las reservas.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.